

vas), sino *pragmáticas* que denotan los modos de articulación de las diferentes "redes semánticas" dentro de las cuales diversas "ideas" (o, más bien, sus enunciaciones particulares) vienen a tomar su sentido específico.

La respuesta a la pregunta de Pani sobre la filiación de los "monarquistas" nos conduce, pues, al nivel de los *lenguajes políticos* y cómo éstos vinieron históricamente (es decir, contingentemente) a articularse. En definitiva, como ella misma sugiere, su pregunta lleva implícita una interrogación no respecto de lo que fue dicho, sino cómo fue posible para determinados actores políticos decir lo que dijeron; cómo acciones, eventos y afirmaciones se hacían inteligibles para sus propios agentes y, algo más importante aún, cómo estas condiciones pragmáticas de enunciación se transformaron; esto es, respecto a los mecanismos y procesos –siempre sumamente intrincados– por los cuales el conjunto de premisas implícitas en que los discursos se sostienen se ve minado históricamente y, finalmente, se transforma, tornando aquellas afirmaciones al principio "prohibidas" o "carentes de sentido", en "posibles" y "significativas". En síntesis, lo que se plantea es la necesidad de una aproximación a lo que podemos llamar la "retórica" de los textos que provea un marco posible para pensar cómo las "contradicciones históricas" vienen a inscribirse en los discursos, sin reducir por ello a éstos en meras "representaciones" de aquéllas.

Creo que las observaciones de Pani a mi trabajo resultan, muy pertinentes. No puedo, pues, más que alegrarme de encontrar en ella no sólo una lecto-

ra atenta de mi libro, sino algo mucho más importante: una *interlocutora* (un fenómeno poco frecuente de hallar en nuestra disciplina, la historia intelectual, sumamente fragmentada por su posición "fronteriza", articulada en la intersección entre disciplinas diversas: crítica literaria, filosofía, pensamiento político, antropología, etc., y por la pluralidad de enfoques teóricos que hoy reina en su seno, "historia de las mentalidades", "de las ideas", de "arte-factos culturales", etcétera).

Elías Palti
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE QUILMES-CONICET

Esther Martina Vázquez Ramírez, *Organización y resistencia popular en la ciudad de México durante la crisis de 1929-1932*, INEHRM, México, 1998, 182 pp.

Esta publicación de Esther Vázquez Ramírez mereció mención especial del Premio Salvador Azuela 1997 convocado por el INEHRM. La investigación galardonada fue su tesis de maestría en Historia Contemporánea realizada en el Instituto Mora. El libro constituye una aportación importante a la historiografía del maximato porque descubre la participación de una serie de actores relegados de la vida política y social. La mayor parte de los actores sociales que aparecen en esta historia –colonos, inquilinos, pequeños comerciantes, ambulantes, desempleados y cooperativistas– habían estado ausentes de los más destacados trabajos históricos del

periodo, probablemente porque no se trata de las numerosas clases visiblemente vinculadas a la construcción del Estado posrevolucionario, como los obreros y los campesinos, sino de grupos marginales al mismo. Tal como Esther lo manifiesta, el interés por desentrañar la historia de estos sectores, cuya voz había sido poco escuchada, nació de su inclinación por conocer la participación de los grupos populares en la vida de México. Sin duda, en el ánimo de esta obra trasciende el presentismo, en el sentido de que, impulsada por la importancia que en la actualidad tienen los movimientos civiles, su autora se adentró en el pasado para rescatar la participación de actores urbano-populares en el marco de la constitución del Estado y el partido oficial, en medio de la crisis mundial del 29. La fresca simpatía de Vázquez por las luchas de estos sectores es abierta, no trata de encubrirla con artificios científicos, sino que la asume como punto de partida, y así se entiende el tono épico adoptado en su narración. La transparente afinidad con su objeto de estudio permite al lector ubicar con rapidez la perspectiva desde la cual fue elaborada la investigación. No obstante, este entusiasmo no obró en detrimento de la objetividad ni de la seriedad académica con la que se construyó el trabajo; por el contrario, éste se fundamenta en una acuciosa revisión de fuentes y en una interpretación sustentada en las reglas de evidencia.

Los resultados de este libro no hubieran sido posibles sin la elección de las fuentes hemerográficas como parte central de la investigación. La paciente revisión de las páginas de dos diarios

durante los cuatro años estudiados, permitió la construcción del itinerario de las luchas populares. Los periódicos seleccionados fueron *Excélsior* y *El Nacional*, el primero de tendencia conservadora y representante de los grupos acomodados del país, y el segundo vocero del recién fundado PNR y, por tanto, interesado en brindar la perspectiva de los grupos a los que el partido intentaba representar. Así, el contrapunteo entre dos versiones de los acontecimientos permitió conocer con mayor agudeza el significado de estas luchas en el contexto nacional. Además, se consultaron archivos públicos, como el Archivo General de la Nación, fuentes primarias publicadas y la más importante bibliografía relacionada con el periodo y el tema en estudio.

La tan celebrada presencia de la sociedad civil, detectada por numerosos intelectuales a partir del movimiento de 68 o, más aún, a raíz del terremoto de 1985, no es una novedad, tal como nos lo demuestra este texto, sino que se ha manifestado a lo largo del siglo que está por concluir. La crisis económica mundial de 1929, que como acertadamente señala la autora se inició en México desde 1927, fue el detonador de esta explosiva marcha de los grupos populares en favor de sus demandas. Son evidentes los paralelismos entre el México de entonces y el de hoy que, azotado por la crisis económica, ha presenciado el enorme descontento entre los sectores menos favorecidos, que hacen evidente su insatisfacción por medio de manifestaciones públicas, de las pugnas, en ocasiones sangrientas, entre los vendedores ambulantes y el comercio organizado, del

surgimiento de organizaciones populares, de demandas a veces violentas en favor de la solución de sus problemas. De grupos, en fin, que se organizaron de manera independiente al Estado, autogestivos, y que mediante sus continuas presiones lograron que la clase política se sensibilizara sobre su situación y pusiera remedios, si bien parciales, a sus dificultades. La anatomía realizada por Vázquez revela que hubo movimientos que se gestaron de abajo hacia arriba y que el populismo del Estado posrevolucionario no sólo fue resultado del apadrinamiento vertical y descendente hacia ciertos sectores populares, sino que al margen de él aparecieron luchas genuinamente autónomas, alejadas de las instituciones tradicionales de poder, como los partidos o los sindicatos. De esta manera, la obra enriquece nuestro conocimiento sobre la forma en que se fue gestando la relación entre los grupos sociales desposeídos y el Estado, más allá de los campesinos y obreros, hasta ahora privilegiados por el análisis historiográfico.

Este libro está estructurado en cinco capítulos. El primero de ellos habla de la ciudad de México durante el periodo de la crisis. Nos proporciona un panorama de las consecuencias económicas del *crack* de la Bolsa neoyorquina en el país y las repercusiones que tuvo en especial en la ciudad de México; de igual forma aborda y caracteriza el crecimiento urbano registrado en la capital y, por último, reseña las principales consecuencias sociales y económicas que acaecieron este conjunto de fenómenos.

El segundo está dedicado a los colonos e inquilinos. En él destaca el des-

orden urbano que privaba en la metrópolis, en la que los fraccionadores vendieron impunemente lotes sin servicios a los más necesitados, pasando por encima de los reglamentos de construcción y que, pese a los esfuerzos gubernamentales, no lograron que los especuladores del suelo urbano dotaran de servicios a los terrenos vendidos. Nos presenta el panorama de una ciudad segregada entre las barriadas pobres carentes de servicios, en las que se hacían los pobladores en medio de las más terribles condiciones sanitarias y de seguridad, y las colonias para las clases media y alta: jardinadas, con agua potable e iluminación, avenidas amplias, bien trazadas y pavimentadas. Ante la problemática cotidiana que enfrentaban, los colonos optaron por organizarse y exigir al gobierno que los dotara de servicios, pues sus esfuerzos por conseguir que los fraccionadores cumplieran con sus compromisos habían caído en el vacío. Hicieron públicas sus demandas por medio de juicios contra los empresarios, de la prensa, de mitines y marchas, de memoriales dirigidos a diversas autoridades, y encontraron solución parcial a sus problemas mediante la creación de juntas de mejoras materiales, que recolectaban fondos entre los míseros propietarios para acometer las obras de saneamiento y urbanización necesarias. En ocasiones consiguieron que el gobierno del Distrito Federal participara en la construcción de estas obras. La tónica de las relaciones entre los sindicatos de colonos y las autoridades fue de colaboración. A partir de 1930 el gobierno puso en marcha un ambicioso proyecto para introducir drenaje,

agua potable y pavimento; pese a las fuertes erogaciones, en una etapa de escasez de fondos, el presupuesto destinado a estos fines fue insuficiente, por lo que se optó por institucionalizar la participación de los habitantes en la mejora de los servicios por medio de la Oficina de Cooperación. La política de obras públicas impulsada desde el Departamento del Distrito Federal, tal vez con objeto de evitar que arreciara el descontento popular y, con ello, el fracaso de la organización centralista que recién había adquirido esta entidad, tuvo efectos anticílicos; permitió aumentar el empleo y el consumo constituyéndose en parte de las medidas anticrisis adoptadas en esos años. Al mismo tiempo, como lo señala la autora, marca el inicio del Estado benefactor de corte mexicano que buscó el respaldo de las masas. Por su parte, las organizaciones inquilinarias abandonaron el radicalismo que caracterizó su movimiento en 1922 y optaron por posiciones conciliadoras que les permitieron lograr algunos triunfos, como una política más condescendiente hacia los inquilinos morosos y la expedición del código sanitario, que obligó a los caseros a cumplir con una serie de normas para las viviendas que rentaban.

El tercer capítulo nos presenta el panorama que enfrentaban los pequeños comerciantes, los vendedores ambulantes y los semifijos. Los minicomerciantes exigieron que se redujeran los impuestos, se erradicara la corrupción de los inspectores y se frenara el agio que invadía esta actividad. Entre ellos afloró la xenofobia contra los judíos, los chinos y, en menor medida, los libaneses, porque eran sus compe-

tidores. El antisemitismo cobró mayor fuerza porque muchos de los prestamistas eran judíos, y así, exigieron que se les impidiera dedicarse al pequeño comercio y se frenara la inmigración. En ocasiones la violencia estuvo a punto de estallar, pero fue frenada gracias a la hábil intervención del general Melgar, vinculado al PNR. La suerte que corrieron estos inmigrantes, gracias a la protección oficial, no fue la misma de los chinos en el noroeste. La buena relación entre los diputados y los pequeños comerciantes dio como fruto la creación de la Federación Nacional de Comerciantes e Industriales en Pequeño, adherida al partido oficial, y éstos consiguieron que fueran escuchadas parte de sus demandas en las leyes expedidas. Por lo que se refiere a los ambulantes y semifijos no sólo enfrentaron la oposición del comercio organizado, sino también de las autoridades. Crearon diferentes asociaciones para defender sus intereses, reclamaron su derecho al trabajo y lograron que se expidieran reglamentos que reconocieran sus actividades.

El desempleo, uno de los primeros resultados de la crisis, es estudiado en el cuarto capítulo. El número creciente de cesantes se vio incrementado por la expulsión de miles de trabajadores mexicanos de Estados Unidos. Surgieron diferentes organizaciones que lucharon en favor de los desempleados y algunos consiguieron que ciertas dependencias gubernamentales crearan talleres para emplearlos, así como cooperativas de trabajo y consumo. Entre los "sin trabajo" aparecieron dos tendencias: la comunista, interesada en poner en jaque al poder, y la indepen-

diente, que buscó la cooperación de las autoridades. De acuerdo con las cifras oficiales, el número de cesantes alcanzaba casi los 200 000 hacia 1931. Surgió la Confederación Nacional Obrera Pro Trabajo, que consiguió cierto apoyo en los sectores oficiales; otras asociaciones exigieron en vano al gobierno la creación de un seguro de desempleo. En cambio, el Comité de Desocupados del Distrito Federal, ligado al Partido Comunista, entonces en la clandestinidad, organizó marchas y mitines y mantuvo una actitud radical frente a la autoridad, que respondió con represión y persecuciones. Como respuesta a las demandas de los desempleados, el gobierno creó el Departamento de Previsión Social, adscrito a la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, abrió agencias de colocaciones y fundó el Banco del Trabajo, destinado a dar créditos para la fundación de cooperativas.

El cooperativismo, que fue uno de los remedios anticrisis mejor apoyados por el gobierno, es analizado en el último capítulo. En él se da cuenta del origen de esta opción económica compatible con el capitalismo. Los cooperativistas organizaron diversas sociedades y obtuvieron un amplio respaldo por parte de las autoridades, interesadas en promover este tipo de organizaciones. Fueron creadas escuelas cooperativistas y una legislación especial para promover estas actividades. La razón de la convergencia entre los impulsos del cooperativismo y el gobierno radica en que las cooperativas de producción, comercialización y consumo eran una opción viable para frenar el desempleo. Además, tenía la virtud de detener la radicalización de los

desocupados al brindarles alternativas viables de autoempleo que no entraban en contradicción con los principios del capitalismo, sino que podían coexistir con éste perfectamente. Como bien señala la autora, el cooperativismo permitió la canalización de la autogestión de vastos sectores sociales y coincidió con la vocación hacia la pequeña propiedad de los primeros gobiernos posrevolucionarios; constituía una opción intermedia entre el capitalismo y el socialismo.

El libro de Esther Vázquez nos da una nueva lectura de los años de la crisis desde la perspectiva de la historia social. En este sentido enriquece el panorama historiográfico del periodo que se ha centrado fundamentalmente en la lucha por el poder, desatada a raíz del asesinato de Obregón, el nacimiento del PNR y, en menor medida, en la política económica. A través de sus páginas conocemos otra cara de la historia nacional; aquella que explica de qué manera la turbulencia social fue moldeando al Estado posrevolucionario. El crecimiento del presupuesto del Distrito Federal, que para 1929 se duplicó y en los años subsiguientes se mantuvo relativamente elevado en proporción a la caída de los ingresos y del PIB, se explica como una política de contención al estallido de múltiples movimientos populares urbanos y a la necesidad de legitimación del gobierno. La historia que nos presenta nos permite atender la génesis del Estado beneficiario mexicano o, como con más precisión es conceptualizado por Enrique de la Garza: del Estado social autoritario. Nos muestra una faceta poco conocida del clientelismo político. Los

funcionarios gubernamentales y del PNR se convirtieron en mediadores de los conflictos y lograron ir cooptando los movimientos mediante la solución de algunos de sus problemas, ya por la vía del gasto público o por intermedio de leyes y reglamentos. Se va dibujando el perfil de un partido que va convirtiéndose en puente entre el Estado y la sociedad civil. Los líderes de estos movimientos gestados, como dice la autora, desde sus entrañas, fungieron como vínculos con el poder, sirvieron como termómetros del descontento social y para la reformulación de programas oficiales que respondían a las necesidades por ellos planteadas.

El final de este romance popular queda abierto, como una promesa incumplida en el pasado que se proyecta hacia el futuro. El cierre de esta historia abandona el tono épico y se sitúa a medio camino entre la tragedia, porque los actores no lograron resolver totalmente sus necesidades, y la comedia, porque quienes obtuvieron respuesta a sus demandas lo hicieron a costa de la independencia con la que nacieron originalmente, ligándose al carro del Estado.

María del Carmen Collado Herrera
INSTITUTO MORA

Gonzalo Martínez Corbalá, *Instantes de decisión. Chile 1972-1974*, Grijalbo, México, 1998.

Parecería que, al cumplirse 25 años del golpe de Estado en Chile, numerosas personas vinculadas a diferentes ám-

bitos de la vida política y social, académica y periodística han puesto énfasis en la reflexión sobre ese pasado reciente. Una consecuencia evidente es la numerosa producción de libros y artículos que ha crecido, al mismo tiempo, por el juicio a Pinochet en España y por su detención en Londres.

Pero este renacer del estudio y la reflexión sobre el Chile de la crisis política y de la dictadura no es privativa del país austral, y un ejemplo de lo realizado más allá de las fronteras "nacionales"¹ lo representa el libro que se comenta.

Gonzalo Martínez Corbalá fue embajador mexicano en Chile de 1972 a 1974. Fue espectador privilegiado de los acontecimientos ocurridos en el último año del gobierno socialista de Salvador Allende y los sucedidos con su derrocamiento. Por tanto, tuvo una ventana de observación de la crisis y su resolución autoritaria. Pero a Martínez Corbalá no sólo no se le puede, ni se le debe, considerar un espectador a secas, fue un actor decidido, generoso y valiente como persona y como embajador.

México fue un país solidario con el gobierno de la Unidad Popular cuando sólo eran unos pocos en América Latina los que participaban de una política de respeto por la *vía chilena al socialismo*. El autor lo consigna así:

El 14 de mayo [de 1973] recibí a los dirigentes de la Empresa Nacional del

¹ Las comillas quieren indicar lo disputado del término nacional y de nación en un mundo de corrimiento de fronteras como consecuencia de las migraciones y los entrelazamientos culturales.